
LA HEGEMONÍA EN EL CONOCIMIENTO: MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y DE EDUCACIÓN

José María Barroso Tristán

Universidade Federal da Bahia
Universidad de Sevilla

jmbarroso84@gmail.com



El conocimiento no existe en la nada. Somos los seres humanos quiénes lo creamos, desarrollamos y dejamos constancia de él a través de diferentes canales de comunicación, permitiendo que los saberes descubiertos puedan pervivir a lo largo de la historia y servir como soporte para

continuar aumentando nuestro universo epistemológico. No obstante, la vastedad de conocimientos y su variedad de interpretaciones es tan amplia que no existe posibilidad temporal para que la sociedad tenga contacto con todos los conocimientos en su plenitud, por lo que se tiene que discriminar entre ellos cuáles son los más importantes para ser desarrollados y aprendidos por la ciudadanía. Históricamente esta selección ha sido realizada por los tres clásicos canales de comunicación del conocimiento, es decir, los medios de comunicación, el sistema educativo y la comunidad (en la que se incluye la familia, la iglesia y el entorno más próximo al individuo). Sin embargo, ¿bajo qué criterios se realiza esta selección?, ¿quiénes son los encargados de realizar esta selección?, ¿qué relación guarda el conocimiento que es expuesto a través de los canales de comunicación con el desarrollo de la sociedad?

Saber es poder. Una manida pero real sentencia, pues durante nuestra experiencia vital vamos adquiriendo conocimientos en base a los cuáles tomamos las decisiones que marcarán el rumbo de nuestras vidas como individuos y el de la sociedad como colectivo. El conocimiento que adquirimos, por tanto, es un elemento fundamental sobre el que nos basamos en el presente para pensar posibles futuros y construir los relatos que delimitarán los campos de acción y sus formas para conseguirlos. El conocimiento posibilita, el desconocimiento imposibilita. Esta es una máxima que tienen muy presente quienes ocupan los espacios de poder político y económico de la sociedad, pues mantener ese poder depende en gran parte de conseguir que el conocimiento que llegue a la población muestre que este sistema es el único válido para el funcionamiento de la sociedad. Controlar el conocimiento equivale a perpetuarse en el poder, en cambio, no tener vías de difusión del conocimiento, o que estas sean marginales, nos empuja a una posición también marginal respecto a la toma de decisiones. Los intereses privados poco tienen que ver con los públicos, por ello es extraño observar que el sector público haya renunciado prácticamente a los diferentes canales de comunicación, dejando, si no todo, por lo menos buena parte, en manos del sector privado. En los medios de comunicación, el sector público apenas cuenta con una parte ínfima del pastel, pero, lo que es más singular, es que en el sistema educativo ha renegado de cualquier posibilidad de disputar su espacio en el campo de lo epistémico. Aunque a priori parezca que el sector público es quién marca las directrices respecto al conocimiento a través de las indicaciones del BOE, en la práctica son las empresas editoriales quienes desarrollan los contenidos y las diferentes interpretaciones que aparecen en ellos, además de marcar las pautas didácticas y metodológicas del sistema educativo a través de los libros escolares. ¿Y a quiénes pertenecen éstas editoriales? Siguiendo los datos oficiales de la Asociación Nacional de Editores de Libros y Material de Enseñanza (ANELE), las 24 editoriales que están asociadas bajo sus siglas copan el 90% de la producción de libros escolares no universitarios utilizados en España, a las que, por cierto, parece que no les gusta el *mercado libre*. Indagando un poco más, aunque a primera vista parezca que existe cierta heterogeneidad en estas 24 editoriales, las 13 con mayores niveles de ventas pertenecen a un conjunto bien definido. Grupos empresariales que, junto a los negocios editoriales, controlan medios de comunicación. Entre estos grupos encontramos a PRISA, Hachette Livre, Apollo Global Management, Pearson PLC y a la Iglesia. Además de esta *casualidad* de compartir intereses en la educación y en los medios de comunicación, estos grupos, excepto la Iglesia, son financiados por las empresas adalides del sistema neoliberal. A saber: PRISA, financiada por empresas como Telefónica, HSBC, Banco Santander, CaixaBank y fondos de inversión extranjeros, los conocidos como fondos buitres, como Adar Capital o Amber Capital; Hachette Livre, que pertenece al grupo Lagardère, el cual conjuga su interés educativo con una de las mayores empresas armamentísticas de Europa, EADS; Apollo Global Management, que bebe económicamente, entre otras, de Citibank y Goldman Sachs; y, finalmente, Pearson PLC, que cuenta entre sus accionistas a BP, Allianz Seguros o Morgan Stanley.

Teniendo en cuenta los datos anteriores y entendiendo el sistema educativo como un pilar fundamental de la sociedad para que exista un equilibrio entre los conocimientos de interés público y privado, no es razonable que la difusión del conocimiento a través del sistema escolar esté de forma hegemónica en manos de grupos empresariales. Grupos que, aunque pueda parecer que tienen

intereses diversos por sus posiciones de competencia entre ellos, comparten un interés común, el de mantener un sistema económico que les rinde pingües beneficios y evitar alternativas que puedan disputar su hegemonía. No obstante, este sistema tiene como lógica básica el aumento de los beneficios sin tener en consideración más elementos que los propios de la empresa, es decir, el bienestar de las personas no es precisamente uno de sus objetivos, a menos que este sea un efecto secundario del aumento de sus beneficios, pero en ningún caso la finalidad primaria de sus acciones. Bajo esta consigna, el sistema educativo no es para ellos un espacio que tenga un especial interés para el desarrollo de la sociedad hacia la consecución de sus objetivos de igualdad y justicia social. Más bien al contrario. Mediante la conjugación del control de la producción de libros escolares y de los medios de comunicación, seleccionan y sesgan el conocimiento con la finalidad de mantener las condiciones político-económicas que les permiten conseguir sus objetivos, hacer crecer sus beneficios. Sin embargo, cada uno de los canales juega un papel diferente en la tarea de controlar el conocimiento.

La función principal del sistema educativo, en este aspecto, es la de establecer una base común de conocimiento en la población con la que generar un consenso que legitime el mantenimiento del sistema económico-político como el único válido y racional. Para ello, las editoriales educativas, a través del libro escolar, se han establecido como las protagonistas y directoras de los procesos de enseñanza-aprendizaje, siendo responsables de la selección de los conocimientos presentados y de la forma en cómo nos acercamos a él para su aprendizaje. En primer lugar, mediante las indicaciones que realiza el BOE sobre los contenidos, son las editoriales las que deciden qué conocimientos son seleccionados para desarrollar lo marcado por la legislación, con qué profundidad, bajo qué interpretaciones y las relaciones que se establecen entre los contenidos presentados. De esta manera, y teniendo en consideración a sus financiadores, es evidente que las editoriales no van a incluir entre los conocimientos seleccionados aquellos que relacionan al sistema económico y político imperante con las causas de la desigualdad social, los desastres ambientales o, en definitiva, con las injusticias que el sistema produce. Así, elementos como la acumulación histórica del capital en cada vez menos manos, la responsabilidad de las entidades financieras sobre las crisis económicas que se han repetido históricamente y que recaen sobre los bolsillos de los ciudadanos, la incidencia de la producción empresarial sobre el medio ambiente que está produciendo la deforestación y la desertización del planeta a pasos agigantados, o los intereses económicos existentes en los minerales de países eternamente en guerra, no son contenidos que aparecen en las páginas de los libros escolares. Al mismo tiempo, las miradas críticas, alternativas al sistema o los hechos históricos relacionados con la búsqueda de la justicia social son silenciados o infravalorados en los manuales escolares. La continua lucha feminista por la igualdad de las personas, los logros del movimiento obrero como la consecución de la jornada laboral de 40 horas hace ya 130 años o las propuestas ecológicas para buscar un mundo sustentable, sin que estos ejemplos agoten el repertorio de ausencias, no se presentan como contenidos relevantes a ser estudiados dentro del periodo escolar, sesgando el bagaje epistemológico con el que se educa y, por tanto, limitando las posibilidades de pensamiento para la toma de decisiones de los ciudadanos.

Además de la selección del contenido, las editoriales también estructuran la forma en cómo

nos relacionamos con el conocimiento. Los libros escolares están desarrollados bajo una perspectiva conceptualista, mediante la cual aprendemos los conocimientos como definiciones sin que estos tengan una relación práctica con el mundo que vivimos fuera de las aulas. De esta forma, las relaciones de causa y consecuencia que existen entre el sistema económico-político vigente y los elementos estudiados no encuentran espacio de representación en sus páginas, siendo invisibilizadas para evitar una comprensión del mundo más allá de los conceptos puros. Concretizando lo dicho, en la escuela, por ejemplo, se estudian todos los tipos de bosques que existen y sus diferentes características, pero estos aprendizajes no vendrán de la mano de las motivaciones económicas existentes para la deforestación de dichos bosques y las consecuencias que ello trae para el bienestar de la población y el planeta. El conocimiento no son solo los hechos en sí y las informaciones al respecto, sino también la forma en cómo los entendemos y en cómo nos acercamos a ellos. Aislar los aprendizajes que realizamos de las causas y consecuencias que contienen es, evidentemente, una decisión política que solamente beneficia a quien tiene algo que ocultar en ello.

Si desde el sistema educativo la hegemonía epistemológica busca controlar la base común de conocimientos de la sociedad, desde los medios de comunicación realiza, por un lado, la selección de los temas que van a ser puestos en discusión para la opinión pública y, por otro, marca los límites de las perspectivas y discursos que son aceptables al respecto de las cuestiones tratadas. Respecto a los temas que son seleccionados para ser discutidos, los medios de comunicación siguen la misma lógica que las editoriales escolares. Es decir, exaltar los elementos positivos del sistema imperante y silenciar sus elementos negativos, al mismo tiempo que hace lo contrario con las alternativas y/o críticas al sistema, o sea, ignorar o menospreciar sus elementos positivos y engrandecer sus factores perjudiciales. Para ello, una técnica muy común es la de convertir noticias fundamentales que muestran la perversión del sistema en anécdotas, a la par que transformar hechos superfluos de sus *enemigos* en temas *mainstream*, reiterándolos en el tiempo y en el espacio mediático, y focalizando la discusión pública. Bajo esta lógica, hemos visto como ha pasado de puntillas por los medios de comunicación la [ocultación por parte de Pfizer de que uno de sus medicamentos podría reducir el alzhéimer](#) o la [trama creada entre empresarios, medios de comunicación y el Estado para conspirar contra partidos políticos](#), mientras que ofrecían semanas de información sobre cómo uno de los políticos de los partidos contra los que conspiraron [se bebió dos coca-colas](#) o meses sobre una [supuesta financiación ilegal del mismo partido](#). Noticia, esta, creada por la trama nombrada anteriormente y desestimada por la justicia en varias ocasiones. Los grupos de comunicación marcan la agenda pública sobre los temas a ser tratados, pero para conseguirlo no solo hacen falta las noticias, sino también los *periodistas*, en su gran mayoría tertulianos de medios afines a la ideología sustentada, que aportan interpretaciones alineadas al interés privado y que generan una sensación de que sus opiniones representan al *sentido común*. Es importante resaltar que, al igual que en el caso específico de las editoriales educativas, en el mundo de la comunicación existen multitud de periódicos, radios o canales de televisión, sin embargo, la mayoría de estas están concentradas en pocas empresas, como el Grupo Planeta, Mediaset y Vocento. De esta manera crean una apariencia de diversidad en la información, cuando la realidad es que los canales de comunicación que se muestran como más neoliberales o como más sociales, como podrían ser el periódico La Razón y la cadena televisiva La

Sexta respectivamente, pertenecen al mismo grupo empresarial, Grupo Planeta. Este falso aspecto de diversidad es empleado para, a través de los *periodistas* y los diferentes canales, situar los límites de hasta dónde pueden ser discutidas las informaciones establecidas por ellos mismos como las importantes para ser debatidas en la sociedad. Todo lo que sobrepase los extremos marcados por los grupos de comunicación será considerado como irracional o intrascendentes al salirse del *sentido común* establecido por los *periodistas*.

La hegemonía en los canales de comunicación les permite *escoger* los referentes de importancia en los diferentes sectores de la sociedad. Por ejemplo, en la economía, el PIB o las indicaciones realizadas por el Fondo Monetario Internacional juegan un papel fundamental y no lo son tanto las tasas de pobreza u otros indicadores económicos más sociales. De la misma manera, en la educación todo gira en torno a los resultados obtenidos en PISA y no sobre el aprendizaje en sí o las propuestas de reforma educativa elaboradas por la comunidad docente. Marcar los centros de gravedad respecto a lo discutido es un poder que consigue desvirtuar toda temática trabajada, ya que la selección de referentes y centrar el debate en sus interpretaciones influye sobre el pensamiento de la población a través de la presencia o ausencia de determinados conocimientos, y es únicamente sobre el conocimiento hecho patente sobre el que se puede reflexionar a la hora de la toma de decisiones. De esta forma, las reclamaciones de la sociedad que no lleguen a estar presente en los medios de comunicación como tema discutido supondrá que permanecerán en la marginalidad y fuera del debate público.

El poder toma decisiones sin presentarse a las elecciones apoyado por el control que ejerce sobre el conocimiento que adoptamos como válido para el periodo educacional de la población y el que nos acompaña durante toda la vida a través de los medios de comunicación. A través de ambos, sistema educativo y medios de comunicación, el poder recorta el conocimiento y lo muestra bajo un patrón ideológico con el que va conformando un tejido de *verdades* subjetivas que han sido sesgadas por los intereses de grupos que poco tienen que ver con los de los ciudadanos. Recorta el acceso al conocimiento, limitando las posibilidades de razonar sobre los problemas sociales existentes al invisibilizar hechos que son fundamentales para poder comprender la raíz de esos problemas.

Generar los conocimientos que nos lleven a alcanzar la justicia social en el mundo es una tarea muy importante, pero de nada servirán mientras estos no tengan los canales de comunicación lo suficientemente potentes para que sean conocidos por la mayoría en la población. Las diferentes interpretaciones acerca de los hechos y los conocimientos necesitan tener su digno espacio de representación mediática para que se conviertan en temas de reflexión y discusión pública, y para que encuentren actores sociales capaces de llevar a cabo acciones de relevancia social. Sin embargo, cuando estas ideas chocan con los intereses de los poderes hegemónicos, estos los omitirán de las agendas de los medios de comunicación *mainstream*. Los mismos medios que, hoy en día, son los únicos capaces de informar a toda la población.

Por ello, entendemos que es necesario pensar en la construcción de organizaciones públicas

autónomas, financiadas por el Estado pero independientes respecto a la injerencia de partidos y organizaciones políticas, para que velen por la producción de canales de comunicación del conocimiento potentes, capaces de llegar a toda la población y que contengan un marcado sentido social. Organizaciones públicas que ejerzan de editoriales escolares para la producción de una base común de saberes para la población, que tengan como principal interés la mejora de la sociedad y que permitan poner las bases para iniciar el camino hacia la justicia social. Y, al mismo tiempo, que los medios de comunicación públicos se hagan independientes del partido de gobierno de turno, que conformen equipos de periodistas autónomos capaces de marcar una agenda de discusión pública centrada en los problemas de los ciudadanos y sus posibles soluciones, y que no bailen al son de los intereses económicos que rigen el funcionamiento de la sociedad hoy en día. Una sociedad democrática no puede permitir seguir estando bajo los designios de una oligarquía que ejerce monopolio sobre las principales vías de conocimiento de la sociedad, pues el campo del conocimiento sobre el que nos basamos para tomar las decisiones políticas está compuesto únicamente por una serie de saberes subjetivos que favorecen la consecución de su principal objetivo: la pervivencia de un sistema que aumenta sus beneficios, aunque sea a costa de las personas y del planeta.